



*Serie Investigación*

GUERRA Y CONFLICTOS  
CONTEMPORÁNEOS.  
REFLEXIONES GENERALES  
PARA EL CASO COLOMBIANO

---

Miguel María Benito Lázaro  
César Augusto Niño González  
*Coordinadores*



UNIVERSIDAD  
SERGIO ARBOLEDA

**GUERRA Y CONFLICTOS  
CONTEMPORÁNEOS.**  
Reflexiones generales para  
el caso colombiano

Miguel María Benito Lázaro  
César Augusto Niño González  
Coordinadores



UNIVERSIDAD  
SERGIO ARBOLEDA

Guerra y conflictos contemporáneos: reflexiones generales para el caso colombiano / editores Miguel M. Benito Lázaro, César A. Niño González – Bogotá: Universidad Sergio Arboleda, 2018.

211 p.

ISBN: 978-958-8987-84-2 (rústica)

1. GUERRA - HISTORIA 2. GUERRA - COLOMBIA 3. VIOLENCIA - COLOMBIA 4. CONFLICTO ARMADO – COLOMBIA I. Benito Lázaro, Miguel M., editor II. Niño González, César A., editor III. Título 303.6609861 ed. 21

© **GUERRA Y CONFLICTOS CONTEMPORÁNEOS.**  
**Reflexiones generales para el caso colombiano**

José Ángel Hernández García  
Miguel M. Benito Lázaro  
Jorge H. Rincón Ochoa  
Saúl M. Rodríguez  
Jerónimo Ríos Sierra  
Daniel Arturo Palma Álvarez  
Hernando Correa Peraza  
César Augusto Niño González  
Miguel M. Benito Lázaro  
César A. Niño González

ISBN: 978-958-8987-84-2 (*rústica*)

ISBN: 978-958-8987-85-9 (*.pdf*)

**Universidad Sergio Arboleda**

Edición: Cindy Lorena Roa Ovalle  
Carlos Andrés Caho Rodríguez

Junio de 2018.

Fondo de Publicaciones de la  
Universidad Sergio Arboleda.

Queda prohibida toda reproducción por cualquier  
medio sin previa autorización escrita del editor.

El contenido del libro no representa la opinión de la  
Universidad Sergio Arboleda y es responsabilidad del  
autor.

Coordinadores:

Miguel María Benito Lázaro  
César Augusto Niño González

Director del Fondo de Publicaciones:  
Jaime Arturo Barahona Caicedo  
jaime.barahona@usa.edu.co

Diagramación:

Jimmy F. Salcedo Sánchez

Calle 74 No. 14-14.

Teléfono: (571) 325 7500 ext. 2131/2260.

Bogotá, D.C.

Calle 18 No. 14A-18.

Teléfonos: (575) 420 3838 - 420 2651.

Santa Marta.

[www.usergioarboleda.edu.co](http://www.usergioarboleda.edu.co)

Impresión: DGP Editores

Bogotá, D.C.

*Los coordinadores y autores dedican este libro a la memoria  
de Hernando Correa Peraza, colega y amigo (D. E. P.)*



## Contenido

PRÓLOGO .....	7
LA MÁQUINA DE LA GUERRA CONTEMPORÁNEA: EVOLUCIÓN HISTÓRICA .....	13
<i>José Ángel Hernández García</i>	
LA INTERVENCIÓN HUMANITARIA Y EL PROBLEMA DE LA REGULACIÓN DE LOS NUEVOS CONFLICTOS EN LA POSGUERRA FRÍA .....	37
<i>Miguel M. Benito Lázaro</i>	
LA VIOLENCIA EN EL EJERCICIO DE CONSOLIDACIÓN DE LA NACIÓN COLOMBIANA.....	59
<i>Jorge H. Rincón Ochoa</i>	
COLOMBIA ENTRE LOS ALTIBAJOS DEL CONFLICTO Y LA PAZ: UNA MIRADA HISTÓRICA.....	79
<i>Saúl M. Rodríguez</i>	
ESTADO Y PARAESTADO EN EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO. UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA DESDE LA SOCIOLOGÍA.....	107
<i>Jerónimo Ríos Sierra</i>	
HUMANIZACIÓN Y DESHUMANIZACIÓN EN EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO: LA DIVISIÓN DE LA COMUNIDAD ENTRE “NOSOTROS” Y “ELLOS” .....	131
<i>Daniel Arturo Palma Álvarez</i>	
EL ALETEO DE UNA MARIPOSA: EL EFECTO DEL NARCOTRÁFICO EN EL CONFLICTO COLOMBIANO .....	153
<i>Hernando Correa Peraza</i>	
LAS “SEGURIDADES” Y EL TERRORISMO: REFLEXIONES PARA UNA COLOMBIA CONTEMPORÁNEA.....	179
<i>César Augusto Niño González</i>	
EPÍLOGO .....	201
<i>Miguel M. Benito Lázaro</i>	
<i>César A. Niño González</i>	



# **EL ALETEO DE UNA MARIPOSA: EL EFECTO DEL NARCOTRÁFICO EN EL CONFLICTO COLOMBIANO**

*Hernando Correa Peraza<sup>1</sup>*

## **Introducción**

Intentando explicar la Teoría del Caos, los científicos no pudieron hallar otro mejor ejemplo que el proporcionado por el leve aleteo de una mariposa que con sus alas desplaza una imperceptible onda que puede ser el inicio, bajo impredecibles condiciones, de un movimiento huracanado al otro lado del planeta.

Extrapolando el fantástico ejemplo, lo mismo podría decirse del camino seguido por las medidas represivas que contra las drogas sicoactivas han tomado diversas autoridades en los últimos 200 años: se inició con los imperialistas cañonazos de la guerra del opio en China cuyos efectos impensablemente llegaron a los Estados Unidos de donde, como el caprichoso desplazamiento del mentado huracán, se abatieron sobre Colombia con todos sus horrores.

## **Primer aleteo: las Guerras del Opio**

Por esos arcanos de la historia, el multicolor lepidóptero movió sus alas en China cuando se iniciaron las conocidas Guerras del Opio (1839-1842). La derrota ante el Imperio Británico en dos confrontaciones bélicas forzó al Celeste Imperio a tolerar el comercio de la enervante sustancia extraída de la amapola, pero además fue coaccionado para firmar unos que se conocen como Tratados Desiguales, con potencias emergentes, entre las que se contaban los Estados Unidos. En este caso, fue el Tratado de Wanghia

---

<sup>1</sup> El presente capítulo se publica de manera póstuma, tras el fallecimiento del profesor Hernando Correa Peraza el pasado 8 de febrero de 2018.

también conocido como *Tratado de paz, amistad y comercio entre los Estados Unidos de América y el Imperio Chino*, un acuerdo diplomático suscrito el 3 de julio de 1844 con la Dinastía Qing. A pesar de los formalismos y usos diplomáticos, a los chinos no les pasó por alto la falta de equilibrio en esta clase de tratados.

### **Apetitos tempranos**

Científicos de la Ciencias Sociales tienen la palabra para explicar la compleja relación de los norteamericanos con el consumo de sustancias que van desde los tranquilizantes hasta las llamadas drogas duras. Esa relación ha generado una demanda constante, no sólo de productos ilegales, sino también de farmacopea legal como la de los productos creados por los laboratorios alemanes Bayer, como la morfina que ya para 1898 se vendía sin fórmula médica como analgésico, junto con la aspirina inmediatamente inventada por la misma compañía. Ni para que mencionar el famoso nombre de la también famosa Coca Cola, bebida que, hasta 1903, tuvo a la cocaína como su principal ingrediente.

Aún así, con la meta fija de aniquilar las crecientes oferta y demanda, Estados Unidos adoptó draconianas medidas prohibicionistas cuya máxima expresión fue la conocida Ley Seca de 1920. Se buscaba con ellas reflejar el impulso puritano que se había apoderado del país y “librar a los norteamericanos de sus malas costumbres” (Henderson, 2012, p. 45).

El prohibicionismo adquirió severidad cuando, vía rumor, se le hizo creer a la opinión pública norteamericana que las drogas proporcionaban a los afrodescendientes una fuerza sobrehumana que los hacía inmunes a las balas (Henderson, 2012, p. 46). La rígida legislación tuvo éxito: la cocaína prácticamente fue eliminada del mercado norteamericano en la década de 1920. Solo el bajo mundo disponía de ella.

### **Cambio generacional: nuevo aleteo**

Fue en la década de los 60 cuando estalló una verdadera revolución generacional no solo en Estados Unidos, sino también en el mundo occidental, integrada por “los hijos de la guerra” quienes, bajo el lema de “Paz y amor”, se rebelaban contra la rígida prohibición norteamericana que hacía

imposible adquirir drogas que dieran nuevas sensaciones con las cuales distraerse del aburrimiento.

Los *boomers*, protagonistas de la singular rebelión, a menudo fueron asociados con movimientos por los derechos civiles, la liberación femenina, los derechos de los homosexuales, los discapacitados, así como el derecho a la intimidad.

Con tales pretextos, la joven generación camuflaba una verdadera revuelta contra la sociedad tradicional que impedía la libre consecución de drogas para su libre consumo. Para los *baby boomers* el consumo de droga era la manera de desafiar el *statu quo* existente en esa materia.

Esta nueva forma de ver las cosas aportó su principal influencia y legado a la posterior contracultura o movimiento *hippie*, integrado por iconoclastas radicales que atacaban las convenciones y prejuicios sociales en todos los ámbitos, y dependían de la droga no solo como sustancia básica para “inspirarse”, sino también como arma para montar su lucha contra la sociedad.

Para que esta contracultura adquiriera contexto, preciso será añadirle decenas de miles de jóvenes prematuramente veteranos que regresaban de Vietnam a su país devastados por el consumo de drogas. Compendio de toda esta insurgencia juvenil, ya casi universal, serán las revueltas estudiantiles del 68 cuando el lema será “prohibido prohibir”.

El aleteo de nuestra pequinosa mariposa acababa de producir un nuevo fenómeno, dentro del caótico vaivén del aire desplazado por sus alas. Ahora, la mayor parte de la yerba que con ansia buscaban los norteamericanos había que importarla de México, a la que pronto le apareció fuerte competencia: la *Colombian gold*, producto inmensamente superior a todo lo que la juventud protestante conocía en esa materia.

¿Cómo entender esa epidemia?, se pregunta el investigador y médico norteamericano David Musto al tratar de explicarlo en su conocida obra *La enfermedad americana*. El científico se interroga sobre cómo, tras haber mantenido una rígida y exitosa política contra los estupefacientes, de repente en la década de los 60 del siglo XX resurgió en Estados Unidos esa incontrolable avidez por el consumo de drogas. Es esa repentina

caída la que se reflejará directamente en el conflicto interno colombiano (Pizarro, 2004).

Superoferta de alucinógenos y desaforada demanda, dieron nacimiento a un vocablo que no necesita explicación: el adicto. Coincidental o consecucionalmente es por estas calendas cuando aparece el todavía mundialmente famoso conjunto de los Beatles y su exaltación al LSD (ácido lisérgico).

Comienza entonces a desenvolverse un tornado que acabará con la paz tanto de vendedores colombianos como de consumidores norteamericanos. Los *boomers*, cual posesos, para adquirir la *Colombian gold* tenían muchísimos dólares y quienes la vendían, comparativamente, eran pobres de solemnidad. Lo que no fue obstáculo para desaprovechar el negocio. La carencia de dinero la compensaron los colombianos con abundancia de ingenio. Miles y miles de dólares comenzaron a inundar el mercado colombiano aunque, con ojos pudibundos, la sociedad colombiana comenzó a mirar hacia otra parte (Samper, 2013).

Buscando sensaciones cada vez más fuertes, los *baby boomers* pronto abandonaron, por anticuada, la *Colombian gold*. Un sucedáneo fue el LSD casi de inmediato sustituido por la cocaína. El comercio de esta multiplicaba, exponencialmente, las utilidades de cualquiera de los alucinógenos hasta entonces conocidos y consumidos.

El aire desplazado por nuestra ejemplar mariposa se convirtió en torbellino cuando por andar “chuzando” lo que no debía, el presidente Richard Nixon se vio obligado a renunciar y los sucesores del defenestrado mandatario bajaron la guardia en la lucha norteamericana contra el consumo de alucinógenos. Con creces, el ingenio colombiano aprovechó la ocasión y el país comenzó a convertirse en el principal proveedor de estupefacientes para los Estados Unidos.

Mientras al norte del Río Grande estallaba la rebeldía juvenil, en Colombia se sellaba la paz entre liberales y conservadores, lo que, sin proponérselo, sirvió de sudario para ocultar lo que aquí comenzaba a germinarse: nacientes guerrillas, “Golconda”, Teología de la Liberación, Fidel Castro, etc., nada tenían que hacer, por el momento, ante el aplastante

fervor por la paz del Frente Nacional. Paz que, no obstante, en manera alguna significó que los colombianos se hubieran convertido en unos seres pacíficos.

Fue, dentro de ese contexto, cuando presidente Guillermo León Valencia, *manu militari*, aniquiló a decenas de cuadrillas bandoleras, rescoldos de las guerrillas liberales que habían aterrorizado al país en años inmediatamente anteriores. Por ello fue bautizado como el Presidente de la Paz pese a que en su mandato surgieron nubarrones, preludio de lo que sería la nueva violencia.

Los sobrevivientes bandoleros (“los comunes”, que no se acogieron a amnistía alguna) se refugiaron en unas Repúblicas Independientes y, ejecutando los secuestros y asesinatos de Harold Eder y Oliverio Lara, se convirtieron en guerrilleros de las FARC.

¿Por qué los nacientes conmlitones de “Tirofijo” acudieron al secuestro de importantes empresarios? Porque, según lo estatuido en sus conferencias constitutivas, necesitaban dinero para adelantar su actividad clandestina. Y ese necesario dinero, en abundancia, era el que tenían los *boomers* norteamericanos, correctamente señalados desde entonces como adictos.

Los medios de comunicación suelen reseñar la muerte de dos monjas como el primer asalto efectuado por las nacientes FARC. Según fuentes militares, en ese asalto, ocurrido en Inzá, el joven “Tirofijo” estuvo acompañado por el guerrillero cubano Ernesto “el che” Guevara quien iba de paso hacia Bolivia (Molano, 2016).

No hay situación, por mala que parezca, que no sea susceptible de empeorar. Estados Unidos, cuando más lo necesitaba, bajó la guardia en la rígida política antidroga implantada desde 1920. Defenestrado Richard Nixon, su sucesor, Gerald Ford, suavizó la draconiana legislación antidrogas y la tolerancia frente a los psicoactivos y alucinógenos alcanzó su punto máximo durante la presidencia de Jimmy Carter (Galán y Guerrero, 2008 y Tokatlian, 1995).

De ahí la explicación de por qué, ya finalizando los años sesenta y promediando la década del 70, el café, producto bandera de exportación, comenzó a experimentar un auge no antes conocido en el país. Por las

escarpadas laderas de la Sierra de Santa Marta aparecieron cultivos de marihuana que satisfacían las ansias de los adictos norteamericanos.

Este nuevo e inesperado producto de exportación fue toda una bendición, pero también una maldición, para la empobrecida región costeña. El súbito raudal de dólares, sumado a la bonanza cafetera del momento, ponía en peligro la inflación colombiana. Para enfrentar el fenómeno, promediando la década de los 70, el entonces presidente Alfonso López Michelsen creó la que se llamó “ventanilla siniestra”: por allí entraba el chorro de dólares al Banco de la República, sin necesidad de indagar por su origen. La nación continuaba mirando para otro lado.

### **Renace la violencia**

La nubecilla desplazada por el ya lejano aleteo de nuestra protagónica mariposa entró a Colombia, cual turbión, por la costa norte y, promediando el gobierno López Michelsen, atizó un incendio que ya se creía extinguido: cual ave fénix resucitó la violencia.

Ésta tenía una nueva característica: era contra la integridad del Estado. Estopa del incendio que se reiniciaba era, ahora, el dinero del narcotráfico. Quienes ahora se oponían contra el Estado o aspiraban a apoderarse de él hallaron terreno fértil: no solo enfrentaban un Estado institucionalmente débil, sino también poseían suficiente dinero para derrotarlo (López, 2005).

El historiador norteamericano James D. Henderson, en tres puntos concretos, fija las causas de esta neoviencia: nuestra difícil geografía, la debilidad del gobierno y el segmento de la población que optaba por violar la ley sabiendo que nada le pasaría (Henderson, 2012, p. 39).

La chispa que prendió la conflagración fue casual: el 22 de noviembre de 1975 a una avioneta que aterrizó clandestinamente le hallaron 600 kilos de cocaína, cuyo valor en el narcomercado norteamericano era de US\$ 45.000 cada uno. A la semana siguiente, 40 personas habían muerto en Medellín a causa del frustrado envío. Esta fue la ceremonia iniciática de la nueva violencia (Henderson, 2012, p. 42).

## Silencio cómplice

Desde que comenzaron a rodar los dólares por las empinadas laderas de la Sierra Nevada de Santa Marta se notó que en Colombia no había ambiente para investigar el origen de ese dinero. A nadie le interesaba conocer la dimensión de este nuevo rubro de exportación. La explicación parece elemental: junto con esa dolarizada catarata había llegado también la corrupción.

El policía de un olvidado pueblo, el aislado militar, el oscuro burócrata, todos a una “comían callados” haciéndose ricos con los sobornos que recibían. Y las campañas electorales con mayor razón, en este sentido se hacían las de la vista gorda.

El gobierno central, por su lado, estaba ocupado en otros menesteres más complejos. El rebrote guerrillero, en el marco de la Guerra Fría, era más importante que ese “incipiente” tráfico de drogas.

No sobra recordar que el primer pedido de extradición, que se recuerde, por parte de Estados Unidos de un colombiano, el funcionario J.A. Córdoba, para ser juzgado por el tráfico de 15 kilos de cocaína fue negado por el presidente Misael Pastrana Borrero.

Presionado por el gobierno norteamericano para que detuviera el envío de marihuana de La Guajira hacia los Estados Unidos, a Pastrana se le rebeló la dirigencia política de la península protestándole que en manera alguna él tenía derecho a combatir ésta que era “la única forma de subsistencia de la mayor parte de la población” (Fabio Castillo, F., 1987, *Los Jinetes de la cocaína*: 180, citado por Henderson, 2012).

El sucesor de Pastrana, López Michelsen, optó por inhibirse en la materia del creciente narcotráfico. Cuando se le desbordó el problema, López decidió que los culpables eran los norteamericanos al igual que éstos culpaban a los extranjeros por su propia “enfermedad americana”.

Por esa época apareció una voz predicando en el desierto, Álvaro Gómez, el mismo que una década atrás había denunciado la existencia de unas Repúblicas Independientes, ahora sentenciaba: “Los colombianos

saben que tienen un problema con las drogas ilícitas pero no saben qué hacer con él. El país intenta luchar contra el tráfico de drogas, a sabiendas de que es una batalla que Colombia está destinada a perder” (Henderson, 2012, p. 56)

### **Secuestraos los unos a los otros**

Táctica, característicamente comunista, que a Colombia llegó vía Código de Maceo, el secuestro, en todas sus modalidades, se volvió arma de guerra en la larga historia del conflicto colombiano.

El plagio, materia prima e iniciática para financiar actividades delictivas, lo comenzaron los grupos guerrilleros primero secuestrando a ricos extranjeros, después a burgueses urbanos y rurales, luego a opulentos narcotraficantes y finalmente a gentes del común en las llamadas “pescas milagrosas” (Rubio, 2003, p. 19).

Pero fue el M-19 la primera guerrilla beneficiaria directa e indirectamente del tráfico de drogas la que, además, les enseñó a los otros grupos insurgentes cómo servirse de ese letal combustible. Era cuando la marihuana desempeñaba un papel importante en la promoción de la causa guerrillera finalizando la década de los 70.

Fue el auge de la boyante industria de la marihuana desde el inicio de su gobierno y la presión norteamericana sobre el nuevo gobierno de Julio César Turbay, sucesor de López Michelsen, los que movieron al recién posesionado mandatario a enviar al ejército a la costa norte a destruir los enormes cultivos de la *Colombian gold*. Pero destinar tropas para enfrentar la fuente de financiación narcotraficante lo que posibilitó fue el avance de la guerrilla urbana que le dio un vuelco, como más adelante se verá, a la razón de ser de la institucionalidad militar.

Fue en 1978 cuando se inició la edad dorada del mercado la cocaína que, de años antes, venía compitiéndole al comercio de la marihuana. Ahora el narcotráfico sustituyó a los secuestros como fuente de financiación para los irregulares. Y Cuba se convirtió en puerto de narcotransbordo hacia los Estados Unidos.

Ya terminando la turbulenta administración Turbay fue cuando, durante su séptima conferencia, las FARC, fortalecidas por el rico filón del narcotráfico, corrigieron el rumbo de su accionar. El nuevo objetivo ahora era la captura de Bogotá y con ella la toma del poder. Y para ello era imperioso recaudar dinero, sin importar cómo (Corral, 1998). El M-19, en pleno auge, les enseñaría el camino.

Y los demás grupos guerrilleros, para financiar sus andanzas, imitarían a las FARC que ahora habían añadido a su logotipo las letras EP. El único grupo insurgente que no se quiso contaminar fue el ELN que enfocó su fuente de ingreso en los oleoductos.

A todos los levantados en armas, que militarmente se reestructuraban gracias al dinero procedente de la adicción norteamericana por las drogas, les cayó como anillo al dedo el proceso de paz del presidente Belisario Betancur, sucesor de Julio César Turbay.

Los traficantes, fortalecidos por la permisividad de las administraciones López y Turbay, lanzaron su guerra frontal contra el Estado. El 30 de abril de 1984, en pleno proceso de paz con las guerrillas, asesinaron al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. El presidente Betancur, quien con marcado sentimiento nacionalista se había opuesto a enviar colombianos para ser juzgados en el exterior no tuvo otra alternativa luego del asesinato de su ministro: restableció la extradición.

De aquí en adelante Colombia sería el escenario de la madre de todas las batallas. El terror se apoderó del país: narcotraficantes y guerrilleros, desde sus propias trincheras, emulaban por la destrucción del Estado. Y estuvieron a punto de lograrlo (Livingstone, 2004).

El M-19, líder en materia de financiación *non sancta* con dinero de los narcos, usó esta modalidad para provocar el más grave suceso político de violencia en el país: el holocausto del Palacio de Justicia.

Le tocó al gobierno del presidente Barco -sucesor de Betancur- liderar una guerra en dos frentes, ambos empeñados en derrocarlo y ambos debidamente narcofinanciados: los narcotraficantes y las guerrillas. De entrada Barco intentó proseguir con las FARC el proceso de paz iniciado

por Belisario Betancur. La respuesta guerrillera fue una masacre de 27 soldados (la Batalla de Saiza). Esta masacre dio fin al cese al fuego vigente desde el gobierno Betancur.

Con el M-19 sí tuvo éxito aunque las conversaciones de paz estuvieron a punto de irse a pique por el asesinato del poeta y cantor de esa guerrilla, Afranio Parra (Americas Watch, 1991, p. 131).

A su turno Carlos Castaño, antiguo protegido de Escobar a quien ahora combatía, y su gente se imaginaron que debido a la larga vinculación entre Escobar Gaviria y el M-19, Carlos Pizarro era el candidato del Cartel de Medellín y, por tanto, decidió asesinarlo. Con su vida, Pizarro pagó la participación del M-19 en la ilegal y sangrienta industria de narcotráfico.

Anótese que fue a comienzos de la década de los 80 cuando, por reacción, la violencia del narcotráfico condujo a la creación de la Policía Antinarcóticos seguida, pocos años más tarde, del nacimiento de una fuerza élite antiguerrillera, creada mediante el decreto 2157 de 1985. Mas luego, en 1992 nacerá el arma de inteligencia, que había estado precedida por la creación de la posteriormente cuestionada Brigada de Inteligencia (Vargas, 2011, p. 235). Fue así como las Fuerzas Armadas irremediablemente se vieron involucradas en la lucha contra los más importantes actores del narcotráfico (Vargas, 2008).

Otra anotación precisa ser consignada aquí: en la misma década de los 80 fue la administración de Ronald Reagan la que militarizó la lucha contra el narcotráfico y popularizó el término *Guerra contra la Droga* como objetivo de seguridad nacional para los Estados Unidos. Y con esta medida se logró que el término “narcotráfico” hiciera directa referencia a la cocaína (Betancourt y García, 1994, p. 37). Contemporáneamente apareció la figura del sicario, como calificativo de un asesino a sueldo, a sueldo de la mafia.

Hasta los 70 era el DAS el encargado perseguir actividades relacionadas con narcóticos. La magnitud del problema fue tal que en la administración Turbay, y por presión norteamericana, las fuerzas armadas asumieron la lucha contra la marihuana y el control del narcotráfico en general.

Le tocó a la administración Barco considerar al narcotráfico como un factor perturbador del orden público y una amenaza no solo para el Estado,

sino también para la sociedad en general. Más que delincuencia el problema del narcotráfico fue considerado ahora como una amenaza real para la seguridad nacional (Vargas, 2011).

Por su estratégica ubicación, cerca de Panamá, entre 1970 y 1980 paramilitares y guerrilleros de las FARC se habrían apoderado del departamento de Córdoba. Rápidamente, dinero en mano, adquirieron las mejores tierras ganaderas.

Los líderes de la guerrilla frecuentemente eran invitados a suntuosas fiestas de los barones de la droga. Una de las más rumbosas se celebró el 24 de diciembre de 1986, en la finca La Mireya, para celebrar la muerte del director de El Espectador, Guillermo Cano. Amenizó la rumba El Gran Combo de Puerto Rico (Sánchez, 2010, p. 24). Qué diferencia con sus inicios que, cuando esa guerrilla no tenía qué comer, acudió al canibalismo (Molano, 2016, p. 86).

Iniciándose la última década del siglo XX, el leve aleteo de la mariposa de Pekín, produjo una verdadera tormenta en Colombia: se cayó la Cortina de Hierro y con ella todos los auxilios monetarios comunistas para las guerrillas criollas, se desplomó el precio internacional del café y, desafiante, apareció la amapola con muy jugosos pero ilegales ingresos monetarios (Molano, 2016) coincidiendo esto con el inicio en Colombia del gobierno de César Gaviria.

La situación de orden público, deteriorada al máximo por el narcotráfico, obligó al naciente gobierno a crear una muy controvertida figura judicial: los jueces sin rostro. Y no era para menos pues la guerra frontal de la administración Barco contra el narcotráfico dejó un trágico saldo: magistrados de las altas cortes, militares y policías de alto rango, parlamentarios notables, candidatos presidenciales e inocentes personas cayeron acribilladas por las balas mafiosas y la explosión de infinidad de carros bomba.

Con su eslogan de campaña “bienvenidos al futuro”, César Gaviria, sucesor de Barco, tendió un ramo de olivo a la guerrilla y la opinión pública quedó convencida de que finalmente la paz comenzaba a llegar a Colombia. Vanidad de vanidades: las guerrillas lo que habían perfeccionado fue un

doble lenguaje. Mientras hablaban de paz con el gobierno paralelamente luchaban contra sus Fuerzas Armadas.

¿Resultado?: promediando el tercer año de su administración Gaviria, quien había invertido su capital político en la implacable persecución de Pablo Escobar, las guerrillas habían aumentado exponencialmente sus chequeras y sus militantes con el producto dolarizado de secuestros, extorsiones y, especialmente las FARC, del narcotráfico. Con soberano respaldo las FARC, durante su Octava Conferencia Guerrillera, tomaron su más trascendental decisión: tomarse todo el país. Es a partir de ahora, y hasta bien avanzado el siglo XXI, cuando dicha guerrilla se convertirá en el mayor exportador colombiano de cocaína. En otras palabras, se consolidará como verdadero cartel.

La arremetida nacional de la cartelizada guerrilla fue implacable. Fuera del verano, al apagón que fue el Inri de Gaviria le colaboró la guerrilla volando torres de energía por doquier. Ante la tremenda inseguridad rural y urbana, ya en la recta final de su mandato tuvo que permitir la formación de milicias que ayudaran a los ciudadanos a protegerse de las guerrillas. Nacieron así las Convivir.

Ernesto Samper, sucesor de Gaviria y quien años atrás quedó gravemente herido durante un atentado que le costó la vida al líder de la UP, José Antequera, fue el encargado de implementar el naciente programa de las Convivir pero, enredado en su propia telaraña por el escándalo de la narcofinanciación de su campaña presidencial, no solo descuidó el control de las Convivir sino que también se quedó sin músculo para combatir a la ahora denominada narcoguerrilla. Resultado de esta debilidad estatal, según el concepto norteamericano: Colombia se volvió una “narcodemocracia” (Vargas, 2005).

Promediando el gobierno Samper, la violencia creció en forma exponencial. Las más importantes bases militares fueron copadas por las FARC. Decenas de militares murieron y centenares más quedaron prisioneros de las ahora fortalecidas guerrillas. Y Estados Unidos no solo le quitó la visa al presidente, sino que también descertificó a Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico.

Las ahora FARC aceptaron las propuestas de paz que en plena campaña electoral lanzaron los dos aspirantes a suceder en la presidencia al cuestionado Samper. Pero mientras publicitaban sus buenas intenciones por conseguir la paz, sus agentes europeos se lanzaron a los mercados ilegales de armas y contactaron al mayor traficante del mundo, Viktor Bout, conocido en los bajos mundos como “el mercader de la muerte” para solicitarle una cantidad muy grande de armas que serían pagadas con masivos cargamentos de cocaína. El traficante aceptó pero no contó con la astucia de los agentes norteamericanos quienes lo capturaron. Desde 2012 paga condena de 25 años tras las rejas, por venderle armas a las FARC.

La endémica impunidad impuso ahora sus leyes al quedar alimentada por un flujo constante de dinero ilegal proveniente de la droga. Colombia demostraba una incapacidad total para controlar la producción de cocaína y estaba a punto de convertirse en un Estado fallido.

Mientras Pastrana adelantaba conversaciones de paz (zona de distensión) la guerrilla redoblaba sus esfuerzos para derrocarlo. Buscando fondos nacieron las pescas milagrosas.

En mayo de 1999 aviones de carga rusos del narcotraficante de armas Viktor Bout, entregaron a las FARC 10 mil fusiles AK-47, pagados con cocaína.

Un cálculo estima que durante 1999 las FARC ganaron entre 10 y 12 millones de dólares por la cocaína que despacharon al exterior desde 70 pistas clandestinas ubicadas en los 170 municipios que ellos controlaban. Este negocio estaba a cargo de alias “El Negro Acacio”.

Los multimillonarios ingresos de la guerrilla provenientes del narcotráfico, se incrementaron exponencialmente por la oleada de secuestros, producto de las “pescas milagrosas” que convirtieron a Colombia en la “capital mundial del secuestro”-

Fue por esta época cuando arribaron al país “asesores irlandeses” quienes enseñaron a los guerrilleros la fabricación y uso de una nueva arma: los cilindros bomba. La masacre de Bojayá mostró la efectividad del nuevo proyectil.

## **El reverso de la moneda: los paras**

Al igual que la guerrilla, los paras, sucesores en línea directa de las autodefensas, comenzaron también a actuar impunemente. Estos grupos utilizaron sus abundantes recursos provenientes del narcotráfico para financiar sus acciones contra las FARC y, sobre todo, para cooptar amplios segmentos de las instituciones públicas (Garay y Salcedo-Albarán, 2012).

Origen de estos grupos, inicialmente conocidos como Autodefensas, se remonta a 1949 cuando el partido comunista ordenó a sus miembros la resistencia armada contra el gobierno de Mariano Ospina.

FARC y demás guerrillas para obtener recursos, inicialmente acudieron al secuestro extorsivo y una de sus más famosas víctimas fue el industrial Harold Heder, cuya hija había sido raptada en 1933, a quien dieron muerte casi de inmediato, pero por quien los hombres de “Tirofijo” exigían \$2 millones de la época (US\$ 200.000) (Rubio 2003, p. 5).

Luego de este crimen, agudizado por el secuestro, casi simultáneo, del industrial Oliverio Lara, sobre el país se desató una verdadera oleada de secuestros extorsivos lo que llevó a la dirigencia agraria nacional a solicitarle al presidente Guillermo León Valencia que le permitiera la autodefensa.

Valencia accedió a la solicitud y al respecto expidió el decreto legislativo 3398 autorizando la existencia de grupos civiles de autodefensa armada. Años más tarde, en el mandato de Carlos Lleras, el mencionado decreto se convirtió en la Ley 48.

La ola de secuestros no disminuyó sino que aumentó, ya bajo el mandato de Alfonso López Michelsen. Metástasis de esta actividad criminal ocurrió en el departamento de Córdoba, el golfo de Urabá y, muy particularmente, la ciudad de Medellín. López tuvo que viajar a la capital antioqueña para asegurarle a la sociedad paisa que la protegería de la descomposición social que afectaba la región (Henderson 2012, p. 233).

Fue dentro de este contexto donde aparecieron las fuerzas paramilitares, bajo el liderazgo de Ramón Isaza quien de inmediato entró en conflicto con el Frente 7 de las FARC que, a su vez, intentó secuestrarlo. Isaza se

puso en contacto con el Ejército. El conflicto bélico entre “paras” y guerrilla, ambos financiados por el dinero del narcotráfico, había quedado planteado (Spencer, 2001 y Romero, 2006).

Estados Unidos presionó al presidente del momento, Julio César Turbay para que el esfuerzo de Colombia contra la droga se tradujera en efectivas acciones militares.

Las fuerzas paramilitares que, en el entretanto, aumentaban preocupantemente, le dieron visos de legalidad a su movimiento basándose en la Ley 48 de 1968 (gobierno de Carlos Lleras) con ayuda de fuerzas militares que las proveyeron de armamento y entrenamiento. Su primer “trabajo” oficial fue la de servir de guías al ejército contra los frentes guerrilleros.

Los paramilitares, convertidos ahora en ricos emergentes secuestrables, con insaciable apetito, comenzaron a comprar extensos terrenos, pagándolos de contado y con ello alteraron el valor de la tierra no solo en el sector rural sino también en el urbano.

Y para defenderse de la guerrilla, en una cumbre realizada en Bogotá, acordaron “organizar y financiar bandas armadas para enfrentar a los secuestradores que por entonces comenzaban a proliferar” (Rubio, 2003, p. 22). Posteriormente estos secuestrables narcotraficantes, cuando le declararon la guerra al Estado, también comenzaron a practicar el secuestro con fines no económicos, que no los necesitaban, sino políticos, que sí los necesitaban.

Se originó así, promediando la década de los 80, una verdadera guerra civil en el Magdalena Medio. Bandera a cuadros que indicó el comienzo de una verdadera orgía sangrienta fue la aparición del MAS (Muerte a secuestradores) con ocasión del secuestro, por parte del M-19, de Marta Nieves Ochoa, hermana de los mayores socios de Pablo Escobar.

Se logró entonces que paramilitares y estamentos civiles, especialmente ganaderos, apoyaran –tal vez sería mejor decir, sustituyeran- militarmente al gobierno en su lucha contra la creciente guerrilla. Esta colaboración se convirtió en lo que modernamente se designa como la parapolítica. Y dos figuras emergieron en este panorama, Fidel y Carlos Castaño. Esta familia,

terriblemente enemiga de las FARC, tenía una deuda que cobrarle a la guerrilla: tiempo atrás había secuestrado a su padre por quien los Castaño pagaron alto rescate pese a que el secuestrado había muerto en cautiverio.

El dinero y provisiones que los Castaño necesitaban para su guerra no fueron difíciles de conseguir. La bonanza de narcodólares que cayó sobre Colombia convirtieron al mayor de los Castaño en una “máquina de hacer dinero” (Henderson, 2012, p. 241). Carlos Castaño, por su lado, se convirtió en un verdadero líder militar (Camacho, 2006).

Fidel Castaño y Pablo Escobar entablaron amistad. Sin proponérselo, los Castaño quedaban convertidos en socios del Cartel de Medellín. Este encuentro produciría frutos de horror. La nueva asociación, rápidamente, tuvo oportunidad de demostrar todo lo que podía hacer.

Eso que se llama el síndrome de Estocolmo hizo a su aparición, por partida doble. Escobar quedó fascinado por la eficiencia de Fidel Castaño en tanto que los severamente castigados guerrilleros del M-19 tampoco ocultaron su admiración por la lucha que Escobar adelantaba contra el Estado. Esta admiración haría dolorosa metástasis en el Palacio de Justicia.

El EPL, en estado de hibernación hasta la década de los 80, revivió con una orden como meta: conseguir dinero para poder funcionar y, así como las FARC, el EPL también acudió a las abundantes arcas de los narcotraficantes, primero cuidando sus extensos cultivos de coca y marihuana a cambio de dinero y armas.

Mientras Belisario Betancur iniciaba conversaciones de paz, guerrillas y paramilitares se adueñaron del departamento de Córdoba. Por esta misma época Carlos, el menor de los Castaño, se hallaba en Israel asistiendo a un riguroso entrenamiento militar.

Acordes con su mentalidad, los Castaño ya tenían entre ceja y ceja a los líderes y candidatos de izquierda Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo, señalándolos como fichas del Cartel de Medellín, por lo que decidieron eliminarlos.

Fue esta clase de autodefensas la que atravesó un palo en la rueda del proceso de paz iniciado por Belisario Betancur. Al liberar a varios guerrilleros, las autodefensas se sintieron traicionadas por quien se proclamaba como el presidente de la paz. Y grupos importantes dentro del estamento militar también opinaban lo mismo.

Quienes se oponían al precursor proceso de paz de Betancur, dentro de su fanatismo- o ceguera, si se quiere- no fueron capaces de percibir cómo el dinero del narcotráfico intensificaría, con características de guerra civil, la confrontación armada entre guerrillas y paramilitares, ambos beneficiarios del narcotráfico.

Los Castaño y su ejército paramilitar, inexorablemente, fueron convirtiéndose en narcoparamilitares. El narcodinero de Pablo Escobar les servía de combustible. Y el país era un verdadero dorado en materia de dinero ilícito. Fidel Castaño, convertido en una “máquina de hacer dinero”, no desaprovechó la oportunidad.

La lucha de las autodefensas contra la guerrilla dio un violento golpe de timón cuando se contaminó con la guerra que por su lado adelantaba Gonzalo Rodríguez Gacha, el gatillero mayor y socio de Pablo Escobar, quien había comenzado a eliminar metódicamente al naciente partido de la UP y paralelamente sostenía una guerra abierta contra el Cartel de Cali (Henderson, 2012, p. 256).

Para esta nueva etapa, el Cartel de Medellín contrató mercenarios israelíes y británicos quienes instruyeron al máximo al ejército privado que tenía el Cartel de Medellín. Y los candidatos de la UP fueron cayendo abatidos por los grupos entrenados por los mercenarios. Las terribles masacres que asolaron al departamento de Córdoba irónicamente precipitaron la desmovilización del M-19 y del EPL.

Pero fue la masacre de La Rochela, en Santander, la que rebotó la copa. El presidente Barco abolió las disposiciones jurídicas de 1965 (gobierno Valencia) y 1968 (gobierno Lleras Restrepo) que permitían a los ciudadanos conformar grupos de autodefensa.

Ahora sí, lanza en ristre, el gobierno entabló lucha frontal contra el fenómeno paramilitar.

En este momento se produjo un viraje en la mente de Carlos Castaño, militarmente entrenado en Israel. De ideas profundamente conservadoras, el joven Castaño se dio cuenta ahora de que Escobar Gaviria y sus sicarios constituían una verdadera amenaza contra el Estado, sentimiento que había venido creciendo desde cuando el jefe del Cartel de Medellín ayudó al M-19 en la masacre e incendio del Palacio de Justicia. Es que, sin ocultarlo, Pablo Escobar admiraba la lucha de la guerrilla contra el Estado, combate que él mismo estaba librando pero desde su propia orilla.

Para la mente política de Carlos Castaño, pese a que previamente había recibido abundante respaldo del Cartel de Medellín, Pablo Escobar y sus sicarios, a la hora de la verdad, eran “padrinos de la guerrilla” a la cual los Castaño intentaban destruir.

El nudo gordiano era perfecto pues el dinero de Pablo Escobar nutría a la guerrilla y a quienes la combatían. El rompimiento se produjo y ahora los paramilitares de los Castaño, abandonando a sus primitivos protectores, se aliaban contra la subversión en defensa del Estado. Y subversión era cualquier cosa que tuviera aroma de izquierda.

Dos órdenes se produjeron, en el misma dirección, pero en el sentido opuesto: Pablo Escobar decidió que ya era hora de asesinar a Carlos Castaño y este, a su turno, tomó la decisión no solo de asesinar a Carlos Pizarro, sino también actuar militarmente contra su antiguo patrón, Pablo Escobar.

Atrapado en su propia trampa, a consecuencia de su permisividad con el jefe del cartel de Medellín, César Gaviria, impotente para proteger a la ciudadanía, como era su obligación constitucional a lo único que atinó fue a resucitar la legislación que permitía a los civiles ejercer su autodefensa y, antes de finalizar su mandato, dictó el Decreto Ley 356 que daba vida las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, más conocidas como las Convivir, cooperativa que fue implementada por el entrante gobierno de Ernesto Samper. Cuando este dejó el poder, cuatro años más tarde, funcionaban 414 Convivir en todo el país (Henderson, 2012, p. 263).

El entrante y cuestionado presidente Samper lanzó la “Operación Comején” destinada a la destrucción masiva de cultivos de coca mediante el glifosato. La estrategia resultó errónea ya que en lugar de disminuir, los cultivos ilícitos aumentaron.

El orden público colapsó en casi todo el país. Públicamente el ministro de gobierno de la administración Samper, Horacio Serpa, con la sorna que lo hizo famoso, respondiendo a los angustiados ciudadanos que clamaban por protección para sus vidas, justificó su incapacidad asegurando que al gobierno no le era posible ponerle un policía a cada ciudadano, pero que tampoco autorizaba los intentos de entablar conversaciones ni con la guerrilla ni con las autodefensas porque eso sería “repartir la república entre las FARC y Fidel Castaño” (Henderson, 2012, p. 266 y Spencer, 2011).

Andrés Pastrana, sucesor de Samper, con sus políticas de despeje y apaciguamiento convenció a la guerrilla de que había llegado el deseado momento de apoderarse del gobierno. Los astronómicos ingresos, producto de las exportaciones de cocaína a Estados Unidos y a Europa, les permitieron a los guerrilleros equiparse con abundante y moderno armamento.

Fue esta la edad de oro de la expansión guerrillera. Pero también esta situación permitió a las autodefensas aumentar sus filas. Los colombianos comenzaron a darles a los paramilitares el apoyo que le negaban a la guerrilla: una real guerra civil había comenzado.

El mercado del narcotráfico fue fundamental en la lucha de las autodefensas contra la guerrilla pese a que, con anterioridad, el propio Carlos Castaño había amenazado con severas penas a sus propios militantes que resultasen involucrados en este ilegal negocio. Concretamente durante la guerra de Urabá permitió a las autodefensas cobrar impuesto por las exportaciones de cocaína.

Para cimentar su presencia territorial, las AUC enfocaron sus acciones en los civiles. De este modo, por el terror directo ejercido contra simpatizantes de las guerrillas y, en general, de la izquierda política. Usando la enseñanza de Mao según la cual el pueblo es a la guerrilla como el agua al pez, los paramilitares cometían indiscriminadas masacres para quitarle el agua al pez guerrillero. La efectividad de esta diabólica maniobra se reflejó

en una encuesta nacional de opinión de la época según la cual el 82% de los colombianos quería que el ejército no combatiera a los paramilitares y el 76% de ese 82% más bien deseaba que las armas oficiales combatieran a la guerrilla. Los paramilitares, intentando la liquidación rápida tanto de guerrilleros como de sus simpatizantes, concentraron su guerra en lugares aptos para la exportación de drogas.

Cual si de una maldición se tratara, los abundantes recursos del narcotráfico produjeron una división interna entre las propias autodefensas, división que se saldó con una sangrienta guerra entre paramilitares. Centenares de muertos costó la fratricida confrontación.

Que el narcodinero alimentara a guerrillas y autodefensas simultáneamente revelaba, en toda su magnitud la ineptitud del Estado y su debilidad frente a las tensiones que ejerció sobre la democracia nacional la lucha por reafirmar el orden público (Henderson, 2012, p. 273).

Siniestro colofón de toda esta situación la constituyó la masacre de Bojayá.

Si el dinero del narcotráfico lanzó a las autodefensas a combatir entre sí, lo mismo ocurrió en el campo guerrillero. Las FARC lanzaron su poderío sobre el ELN buscando desalojarlo de sitios estratégicos, como el Cataumbo, para poder enviar más fácilmente su droga al exterior.

La confrontación bélica con los paramilitares produjo a su turno un transitorio pero impensable viraje: la guerrilla se vio temporalmente obligada a prescindir del narcodinero y retornar al secuestro para obtener ingresos.

Promediando el gobierno de Andrés Pastrana, en consecuencia, el secuestro se elevó en proyección geométrica. Nacieron así las temibles e indiscriminadas “pescas milagrosas” que virtualmente dejaron al país en estado de sitio. Viajar por carretera se volvió impensable.

En ese orden de ideas, por sustracción de materia, comenzó a fenecer el proceso de paz de Andrés Pastrana y eso que él mismo, desde el comienzo de su mandato, para lograrlo y atendiendo una exigencia de las FARC, había abolido las ya cuestionadas Convivir.

Ahora los paramilitares, con la sartén por el mango, comenzaron a influir con creciente fuerza en la política local y nacional. Ellos eran ahora quienes aprobaban o vetaban candidatos a cargos de elección popular. Fue la expresión máxima de la parapolítica.

El aura de ángel exterminador que habían conquistado en desarrollo de su lucha contra las FARC, repentinamente declinó: ya no eran salvadores sino terroristas, con todas las de la ley.

¿Qué había ocurrido? Ni más ni menos que el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. Estados Unidos lideraba ahora una verdadera guerra santa contra todo lo que oliera a terrorismo. Y de ese mefítico aroma no escapaban los paras.

La crema y nata de las autodefensas procedió entonces a elaborar, en secreto, el denominado Pacto de Ralito, un documento firmado entre jefes paramilitares y más de medio centenar de políticos y dirigentes nacionales cuyo pretexto era “refundar el país”, aunque realmente lo que se pretendía era consolidar una alianza de fuerzas ilegales, financiadas por el narcotráfico para concretar, a futuro, la toma del poder político, viejo anhelo de la guerrilla. Revelado solo seis años más tarde, fue este posiblemente el más sonado y escandaloso episodio de la llamada parapolítica.

Entonces Carlos Castaño, líder militar indiscutible de las Autodefensas Unidas de Colombia, convocó a una cumbre en desarrollo de la cual exigió a todos sus militantes que firmaran un documento protocolizando su divorcio con el tráfico de drogas. Como era natural, prominentes jefes de las autodefensas como Diego Murillo (a. don Berna) y Carlos Mario Jiménez (a. Macaco) se negaron a firmar. El dinero del narcotráfico protocolizó la división de quienes, originalmente, lo que buscaban era la derrota de la narcoguerrilla.

Carlos Castaño y Salvatore Mancuso tuvieron que expedir un comunicado en el que denunciaban que las Autodefensas Unidas de Colombia se habían convertido en una organización “atomizada y altamente penetrada por el tráfico de la droga” (Aranguren, M. 2001, citado en Henderson, 2012, p. 281).

La desaparición de los paramilitares entró en caída libre. Militarmente debilitadas por su confrontación interna, la razón de ser de las autodefensas recibió un golpe definitivo cuando, como sucesor de Pastrana, fue electo presidente Álvaro Uribe, el peor enemigo de las guerrillas.

Auspiciado por el nuevo gobierno nació el Acuerdo de San José de Ralito que, preciso es enfatizarlo, nada tiene que ver con el Pacto de Ralito. Se trataba de un documento firmado el 15 de julio de 2003 entre el gobierno nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia, con el objeto de “dar inicio a una etapa de negociación” y teniendo como propósito “el logro de la paz nacional a través del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el restablecimiento del monopolio de la fuerza en manos del Estado”.

Fue en desarrollo de este proceso cuando se produjo el asesinato de Carlos Castaño, lo que no impidió que el Acuerdo continuara implementándose. Dado que un vacío jurídico se le atravesaba, el gobierno de Uribe Vélez, vía Congreso, impulsó la que aún hoy se conoce como Ley de Justicia y Paz, a la cual la Corte Constitucional le hizo posteriores ajustes.

Blandiendo un garrote y una zanahoria, pero con mano firme, Uribe ofreció la paz a la guerrilla pero también comenzó a restablecer la presencia del Estado en aquellos sitios donde el control de la nación se había perdido en los últimos años. Nacieron así los “soldados de mi pueblo” y se crearon brigadas de montaña en sitios nodales para la guerrilla.

La primera gran ofensiva contra la guerrilla, denominada Libertad Uno, rompió el anillo que los subversivos habían cerrado sobre Bogotá como último paso previo a la toma del poder.

Promediando el primer mandato de Uribe, miles de reentrenados y bien armados soldados cayeron sobre las madrigueras de las FARC. Fue el año 2004 en el que, mediante el Plan Patriota, se modificó la balanza de fuerzas que hasta entonces se mostraba favorable a la guerrilla.

En uno de esos reductos fue donde una patrulla militar halló US\$16 millones que las FARC ya no podían lavar a través del sector financiero. Sin vender el sofá, como lo habían hecho sus antecesores, Uribe atacó a fondo la razón de ser de las FARC, el narcotráfico.

Y comenzaron a morir los más altos jefes de la guerrilla a quienes en administraciones anteriores no se les había producido ni un rasguño. Las FARC, que estuvieron a tiro de as del Palacio Presidencial, ahora estaban en retirada hacia su morada original, la selva profunda.

Por todos los medios, la guerrilla trató de asesinar al presidente Uribe quien, al final de su mandato había cosechado un éxito tan espectacular que, sin solución de continuidad, fue reelecto por los colombianos para un segundo mandato.

La guerrilla se salvó de ser aniquilada solo por el asilo que le dieron los presidentes de Ecuador y Venezuela. Más aún, Uribe no dudó en comentar que si fuera necesario bombardearía a Venezuela. Precisamente en Ecuador, límite con Colombia, cayó abatido por la aviación colombiana Raúl Reyes.

Con este golpe Colombia entró en crisis de carácter militar con sus vecinos Ecuador y Venezuela, pero las FARC recibieron el más demoledor de sus golpes ya que al cabecilla le fue decomisada absolutamente toda la información recopilada durante casi medio siglo de lucha. Las FARC tuvieron que aceptarlo: a partir de la muerte de Reyes todo su trabajo se había venido al suelo y para reiniciarlo tendrían que partir de cero.

Mientras la moral guerrillera quedaba a nivel de las madrigueras, el estamento militar rebozaba de orgullo y de fe en la causa. No era para menos: la Operación Jaque pasó a los anales militares mundiales con letras de molde. Sin disparar un solo tiro, 11 secuestrados le fueron arrancados al propio corazón de las FARC.

Por mandato constitucional Uribe, ya no podía seguir en la presidencia pero las urnas eligieron a Juan Manuel Santos para que redondeara la faena. Sorpresivamente todo cambió. La lucha contra la guerrilla y su nutriente que eran los sembradíos de coca dio un cambio de 180 grados.

Un análisis sereno sobre el mandato del sucesor de Uribe es muy prematuro. Pero algunos altos funcionarios de Naciones Unidas en Colombia como Jan Egeland opinaron en su momento que Colombia nunca alcanzará una paz verdadera.

Puede que tenga razón. Pero al país si le llegó el Nobel de Paz aunque con una postdata: al recibir el premio en Oslo, finalmente el presidente Santos vino a reconocer que el verdadero enemigo de la paz es el narcotráfico.

## Referencias

- Americas Watch. (1991). *La “guerra” contra las drogas en Colombia. La tragedia olvidada de la violencia política*. Bogotá: Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes; Universidad Nacional de Colombia.
- Betancourt, D. y García, M. (1994). *Contrabandistas, marimberos y mafiosos: historia social de la mafia colombiana, 1965-1992*. Bogotá: T.M Editores.
- Camacho, Á. (2006). De narcos, paracaracias y mafias. En F. Leal (ed.). *En la encrucijada. Colombia en el siglo XXI* (pp. 387-422). Bogotá: Norma Editorial.
- Corral, H. (1998). La violencia en Colombia ¿Guerrilleros o narcotraficantes? En R. Tovar (Comp.). *La problemática de las drogas: mitos y realidades* (pp. 91-98). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Galán, J. M. y Guerrero, L. J. (2008) La legalización de las drogas ilícitas en Colombia: elementos para una discusión. En A. Rangel (ed.). *La batalla perdida contra las drogas: ¿Legalizar es la opción?* (23-152). Bogotá: Fundación Seguridad y Democracia – Intermedio.
- Garay, L. J. y Salcedo-Albarán E. (2012). *Narcotráfico, corrupción y Estados. Cómo las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones en Colombia, Guatemala y México*. Bogotá: Debate.
- Henderson, J. D. (2012). *Víctima de la globalización. La historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz de Colombia*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
- Livingstone, G. (2004). *Inside Colombia. Drugs, democracy and war*. Nueva Brunswick: Rutgers University Press.
- López, A. (2005). Conflicto interno y narcotráfico entre 1970 y 2005. En Gustavo Duncan, G., et al. *Narcotráfico en Colombia Economía y Violencia* (pp. 183-226). Bogotá: Fundación Seguridad & Democracia.

- Molano, A. (2016). *A lomo de mula. Viajes al corazón de las FARC*. Bogotá: Aguilar.
- Musto, D. F. (1993). *La enfermedad americana. Orígenes del control antinarcóticos en E.U.* Bogotá: CEI; Ediciones Uniandes; Tercer Mundo Editores.
- Pizarro, E. (2004), *Una democracia asediada. Balance y perspectivas del conflicto armado interno en Colombia*. Bogotá: Norma.
- Romero, M. (2006). Paramilitares, narcotráfico y contrainsurgencia: una experiencia para no repetir. En F. Leal (ed.). *En la encrucijada. Colombia en el siglo XXI* (pp. 357-386). Bogotá: Norma Editorial.
- Samper, E. (2013). *Drogas. Prohibición o legalización*. Bogotá: Random House Mondadori.
- Sánchez, Jr., T. (2010). *Crónicas que da miedo contar*. Bogotá: Icono Editorial.
- Spencer, D. (2011). *Colombia's road to recovery: security and governance 1982-2010*. Washington, D. C.: National Defense University –CHDS.
- Spencer, D. (2001). *Colombia's Paramilitaries. Criminals or Political Force?* Carlisle: Strategic Studies Institute.
- Tokatlian, J. G. (1995). *Drogas, dilemas y dog.as. Estados Unidos y la narcocriminalidad organizada en Colombia*. Bogotá: Tercer Mundo.
- Vargas, A. (Ed.). (2011). *Fuerzas Armadas en la Política Antidrogas: Bolivia, Colombia y Méjico*. Bogotá: Universidad Nacional.
- Vargas, R. (2008). Colombia y el nuevo mercado de drogas ilícitas. En A. Rangel (ed.). *La batalla perdida contra las drogas: ¿Legalizar es la opción?* (309-371). Bogotá: Fundación Seguridad y Democracia – Intermedio.
- Vargas, R. (2005). *Narcotráfico, guerra y política antidrogas. Una perspectiva sobre las drogas en el conflicto armado colombiano*. Bogotá: Tercer Mundo.